

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	MARÍA PIEDAD DUQUE Saldarriaga
DEMANDADO	AFPs Porvenir S.A., Protección S.A. y COLPENSIONES
PROCEDENCIA	Juzgado 014 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 <b>014 2018 00012</b> 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 124 de 2021
TEMAS Y SUBTEMAS	Ineficacia de traslado
DECISIÓN	Revoca conceptos excluidos de restituciones, en lo demás confirma

Hoy, **treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados: Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por las apoderadas judiciales de las **AFPs Porvenir S.A., Protección S.A.**, y grado jurisdiccional de consulta en favor de **Colpensiones**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Catorce laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario contra estas entidades promovido por **María Piedad Duque Saldarriaga**, código de radicado único nacional 05001 3105 **014 2018 00012** 01.

**Auto:** En los términos de la documentación allegada a esta instancia se reconoce personería a los abogados **María Paula Ángel Taborda** y **Jorge Enrique Martínez Sierra**, para asumir la representación judicial de Colpensiones y de la AFP Porvenir S.A., en su orden.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, en concordancia con los acuerdos del

Consejo Superior y Seccional de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes de la Sala el proyecto discutido y aprobado virtualmente en acta N° **021**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

## **Antecedentes**

La demandante pretende se declare la nulidad por ineficacia de la vinculación al RAIS el 1º de agosto de 1995 a través de la AFP PORVENIR S.A., y en consecuencia, se condene a su traslado automático al RPMPD administrado por COLPENSIONES, sucesora procesal del extinto ISS, con la restitución de la totalidad de lo ahorrado en su cuenta de ahorro individual y los rendimientos.

En sustento de ello afirma que, es actual funcionaria de la Contraloría General de Medellín, estuvo vinculada al RPMPD administrado por el ISS hasta el mes de agosto de 1989. En agosto de 1995 se vinculó al RAIS a través de la AFP Protección S.A., luego a Colpatria S.A. y finalmente a Porvenir S.A., vinculación que continua vigente desde el 1º de enero de 1999. Agrega que su incorporación al RAIS fue realizada *por error motivado por la negligencia en la tarea de afiliación, al incumplirse el deber legal de suministrar una información veraz y oportuna, con advertencia del riesgo y consecuencias negativas que le generaría esta determinación, sin hacer una comparación frente al RPMPD, se omitió, entonces la actividad de asesorar con información clara y entendible a la trabajadora sobre el sistema íntegro del régimen pensional de prima media con prestación definida y de ahorro individual con solidaridad que le permitiera valorar las consecuencias de su afiliación, pues se le habló únicamente de las cosas "buenas", nunca se le informó acerca de las diferencias sustanciales entre los regímenes y requisitos para pensión en cada uno de ellos, valor o cuantía de la mesada pensional en cada uno, sobre la distancia desventajosa para los usuarios del fondo privado, configurándose así un error de hecho que vició su consentimiento; a petición suya se le hizo proyección pensional el 26 de*

noviembre de 2017, indicándosele que a los 57 años tendrá una mesada de \$737.712, percibiendo, para la fecha de presentación de la demanda, un salario mensual superior a \$4.000.000, configurándose así el error de hecho que vició su consentimiento.

En auto del **05 de febrero de 2018, se admitió** y ordenó dar trámite a la acción, enteradas de la existencia de la actuación las demandadas allegaron escritos de contestación así:

La **AFP Porvenir S.A.**, no le consta la afiliación de la demandante al ISS hoy COLPENSIONES; frente a la vinculación al RAIS, advierte que consultado el historial de vinculaciones de Asofondos SIAF, registra para el 30 de junio de 1995, afiliación a Protección S.A.; para el 30 de noviembre de 1998 afiliación a Colpatria S.A., y para el 22 de julio de 1999, afiliación a Porvenir S.A., encontrándose actualmente vinculada a esta última entidad. Sobre la simulación pensional dice que es parcialmente cierta, pues estas liquidaciones o cálculos son de carácter provisional. Los demás supuestos no le constan. **Se opuso** a la prosperidad de las pretensiones porque a la demandante se le brindó asesoría legal acorde a las disposiciones vigentes y a las exigencias de la Superintendencia Financiera, suscribiendo libremente el correspondiente formulario, propuso las **excepciones** de: prescripción, falta de causa para pedir e inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, enriquecimiento sin causa y la innominada o genérica.

**Colpensiones** admite como cierta la afiliación a esa entidad efectuada el 16 de agosto de 1989. Los demás supuestos no le constan. **Se opuso** a la prosperidad de las pretensiones y formuló **las excepciones** de imposibilidad de traslado de régimen, inexistencia de la obligación de reconocer la afiliación al RPMPD por falta de legitimación en la causa por pasiva, improcedencia de la declaratoria de ineficacia o invalidez del

traslado, prescripción consagrada en el artículo 1750 del Código Civil, e igualmente la trienal del artículo 151 del CPT y de la S.S., equivalencia del ahorro e imposibilidad de condena en costas.

En auto del 21 de agosto de 2019, se ordenó la vinculación como Litis consorte necesario por pasiva de la AFP Protección S.A., sociedad que debidamente notificada allegó respuesta, manifestando frente a los hechos, no constarle la afiliación de la demandante al Iss, pero es cierto que estando allí decidió trasladarse de manera libre y voluntaria al RAIS el 30 de junio de 1995, luego de una debida asesoría, como se advierte del formulario anexo, explicándosele características como: *la construcción de un capital en una cuenta de ahorro individual que genera rendimientos financieros, la cual determina el monto de la pensión, la posibilidad de pensionarse en forma anticipada siempre y cuando cuente con un capital suficiente para financiar una pensión equivalente al 110% de un salario mínimo legal mensual vigente, como lo establece el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, la posibilidad de que sus aportes hagan parte de la masa sucesoral en caso de fallecimiento, la facultad de aportes a pensiones voluntarias, entre otras. Así mismo, se le explicaron las condiciones del Régimen de Ahorro Individual RAIS y sus diferencias con el Régimen de Prima Media RPM, dejando claridad en que uno y otro son excluyentes y que cada uno conlleva sus propias regulaciones, sin que pudiera hablarse de ventajas o desventajas o consecuencias negativas entre ambos, pues simplemente son regímenes diferentes que traen consecuencias diferentes para cada persona, por lo que correspondió al demandante realizar, de acuerdo con toda la información recibida, su propio juicio de conveniencia o favorabilidad que finalmente la llevó a elegir a esta administradora en forma libre, voluntaria y con información pormenorizada respecto a su futuro pensional.* Resaltándose características y comparaciones en los siguientes aspectos: cuenta de ahorro individual vs. Fondo común, capital acumulado vs. Requisitos de edad y semanas de cotización; garantía de pensión mínima en el RAIS, devolución de saldos vs. Indemnización sustitutiva. Los demás supuestos no son ciertos o no le constan. Se opuso a las pretensiones. Y formuló las **excepciones** de inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones,

innominada o genérica, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, y el seguro previsional por la misma razón y por afectar derechos de terceros de buena fe.

La primera instancia terminó con sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito, en la que declaró la **ineficacia** de la afiliación de la demandante al RAIS, mediante formulario diligenciado ante la AFP Protección S.A. el 30 de junio de 1995, y posterior movilidad a las AFP Colpatria S.A. el 30 de noviembre de 1998 y a Porvenir S.A. el 22 de julio de 1999. **Condenó a la AFP Porvenir S.A.,** a trasladar con destino a Colpensiones, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el valor existente en la cuenta de ahorro individual de la actora, con los rendimientos que se hubieren causado, incluyendo las comisiones de administración a partir del 1º de enero de 1999, **con excepción de los dineros pagados por concepto de seguro previsional; condenó a Protección S.A,** a que dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, retorne a Colpensiones el valor de las cuotas de administración causadas entre el 1º de julio de 1995 y el 31 de diciembre de 1998, por concepto de afiliación de la demandante, **con excepción de los dineros pagados por concepto de seguro previsional.** Condenó a Colpensiones a reactivar la afiliación de la actora al RPMPD sin solución de continuidad. Ordenó a Porvenir S.A. comunicar, dentro de los 10 días a la ejecutoria de la sentencia, a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Oficina de Bonos Pensionales, para los efectos correspondientes. Declaró improbadas las excepciones de mérito propuestas y gravó con costas a Porvenir S.A. y Protección S.A. a favor de la demandante, fijando el monto de las agencias en derecho

Argumentó el fallador que en los autos no quedó acreditado el cumplimiento del deber de información por parte de Porvenir S.A. y

Protección S.A. frente a la demandante, al momento de realizar el traslado de régimen pensional, y de la movilidad entre administradoras, resultando por tanto procedente la declaratoria de ineficacia teniendo en cuenta que se cumplen las subreglas decantadas por la jurisprudencia especializada, disponiendo las restituciones a que se hizo alusión en párrafo precedente, más no las sumas destinadas a la cobertura de seguros previsionales por estar en poder de terceros.

## **Recurso de apelación**

La **AFP Porvenir S.A.** Pide revocar el fallo en su totalidad, toda vez que el formulario de afiliación suscrito por la demandante es documento público que se presume autentico en los términos de los artículos arts. 243 y 244 del C.G. del P., y adicionalmente contiene las declaraciones del art. 114 de la Ley 100 de 1993, efectuándose la selección de régimen en forma libre, espontánea y sin presiones, hecho ratificado en el interrogatorio de parte, documento que no fue tachado ni desconocido.

Agrega que el Juez aduce que no se allegó prueba del cumplimiento del deber de asesoría e información completa, veraz y oportuna al momento de vinculación, inferencia que no se ajusta a la realidad, porque la AFP cumplió con la carga de la prueba, pues pese a su inversión aportó los documentos en su poder, para demostrar que la demandante estuvo vinculada producto de una decisión libre e informada, lo que se infiere no solo del formulario sino de la conducta de la afiliada, que permaneció en el RAIS, efectuando traslados horizontales entre fondos y permitiendo los descuentos, lo que conduce a la certeza de que su intención era permanecer en ese régimen, sin que jurídicamente sea viable imponer cargas distintas a las previstas en las leyes existentes al momento de la afiliación, pues ello constituiría violación al debido proceso y a la confianza legítima del fondo; siendo la afiliada para la época jurídicamente capaz y el acto celebrado contener

objeto y causa lícitas, sin que por interpretaciones de normas que desconocen instituciones jurídicas primarias del Estado Social de Derecho se le pueda restar validez y eficacia.

En el hipotético caso de considerarse que el negocio jurídico no tuvo validez, debe tenerse en cuenta el contenido del artículo 113 de la Ley 100 de 1993, y ordenar solo el traslado del saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos, sin incluir valores diferentes, toda vez que hacerlo configura enriquecimiento sin justa causa a favor de Colpensiones, entidad que no hizo parte del negocio jurídico, y además con esos dineros no se financia la prestación por vejez, por lo que determinar el reintegro de los gastos de administración equivale a ordenar a las compañías de seguros la devolución del valor de la póliza en caso de no presentarse el siniestro, agregando que los gastos de administración no pertenecen al afiliado en ninguno de los dos regímenes, argumento y razón de peso para decir que prescriben en el término previsto en los artículos 488 del C.S. del T. y 151 del C. P. T., por lo que así debe declararse, quedando además demostrado que el fondo actuó de buena fe y conforme a las leyes que lo han regido. Insiste en la revocatoria de la decisión para que en su lugar se imparta absolución.

La **AFP Protección S.A.**, impugna el numeral 3º de la parte resolutive, esto es, la orden de devolver lo descontado por comisión de administración, pues tiene fundamento en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 7 de la Ley 797 de 2003, y es utilizado para cubrir gastos de administración y el pago de la prima de seguro previsional, operando en ambos regímenes, obrando a fls. 182 prueba de los aportes y rendimientos trasladados a Porvenir S.A., siendo los recursos debidamente administrados, luego el retorno de tal porcentaje constituiría un enriquecimiento sin causa para Colpensiones al recibir una comisión no destinada a financiar la pensión de vejez; y adicionalmente, por la buena

gestión, en los términos del artículo 1746 del Código Civil, la AFP tiene derecho a conservar tal porcentaje. Agregado que si la consecuencia de la ineficacia es que las cosas vuelvan al estado anterior, como si el acto no hubiere existido, Protección no debió administrar los recursos y por tanto los rendimientos no se causaron y tampoco existió cobro de la comisión de administración, no entendiéndose entonces las consecuencias de los fallos que declaran la ineficacia, cuando dicen que el acto no existió pero se deben restituir las comisiones, con los restantes recursos. Cita apartas de la sentencia 31989 de 2008 para fundamentar el argumento de no devolución de tal suma, y de la SL 2324 ponente Ana María Muñoz Segura, en que realiza el análisis de los efectos de la ineficacia frente a terceros de buena fe, precisando que la restitución de aportes no debe ser total, ni supone retroactividad plena, pues deben mantenerse todas las situaciones consolidadas y de buena fe. Referencia además concepto de la Superintendencia Financiera del 17 de enero de 2020, en el que se explican los rubros a devolver cuando se declara la ineficacia del traslado. Solicita revocar el fallo en tal apartado, teniendo en cuenta además que al ser un concepto de tracto sucesivo, frente al mismo operó el fenómeno extintivo de la prescripción, luego habiendo estado vigente la afiliación entre los años 1995 y 1998, y trasladándose los saldos en 1999 a la nueva AFP desde entonces transcurrió el termino extintivo y Protección no adeudaría suma alguna. Insiste en la revocatoria de este numeral.

En favor de Colpensiones se conoce en grado jurisdiccional de consulta, en los términos del artículo 69 del C. P. T. y de la S.S.

De la oportunidad para presentar alegatos hizo uso la apoderada judicial de **Colpensiones**, solicitando la revocatoria de la decisión, toda vez que como entidad pública actuó de buena fe y no tuvo incidencia en el acto traslado de la demandante, lo que obedeció a la libre elección y ejercicio del derecho consagrado en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993,



modificado por el 2º de la Ley 797 de 2003, norma que además impide afiliar a personas que se encuentren a menos de 10 años de la edad para pensión, esto con el fin de que pueda madurar el capital para luego ser reconocida y pagada la prestación económica, para que así no se vea afectado el sistema financiero; y sin desconocer la línea de la jurisprudencia especializada el fin del periodo de carencia previsto en la norma consiste en evitar la descapitalización del RPMP. Solicita se absuelva a la entidad de las pretensiones incoadas en su contra y no se grave con condena en costas.

El apoderado de la **AFP Porvenir S.A.**, argumenta que en este asunto no se probó ninguna de las causales previstas en artículo 1741 del Código Civil, en concordancia con el artículo 1598 de la misma obra, y si bien el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 menciona que quedará sin efecto la afiliación, también lo es que, bajo ninguna circunstancia se refiere si quiera por aproximación a lo dispuesto en los artículos 1740 y ss. del C.C., por un principio básico de derecho, cual es el de la inescindibilidad de las normas, que impide acudir en forma indiscriminada a diferentes preceptos para resolver un asunto en concreto; y finalmente el artículo 899 Código del Comercio, también enseña que, el acto o negocio jurídico, contrario a una norma, tenga causa u objeto ilícito o lo celebre una persona absolutamente incapaz, es nulo absolutamente, sin que **NINGUNO DE ESTOS PRESUPUESTOS LEGALES, SE ALEGARAN NI MENOS RESULTARON DEMOSTRADOS EN EL PROCESO**, descartándose la existencia de causal de nulidad del acto jurídico. Agrega que la AFP le garantizó a la demandante el derecho de retracto, conducta que se prueba con la publicación en el diario el Tiempo el 14 de enero de 2004, realizándose el cambio de régimen con Porvenir S.A, de forma libre y voluntaria, brindándosele una información oportuna y completa, como lo aseveró al suscribir el formulario de afiliación, el cual se presume auténtico, allegando esa administradora las pruebas en su poder, sin que se le puedan imponer cargas distintas a las previstas en las leyes pre existentes al momento de la

afiliación. Alude luego a los actos de relacionamiento de la afiliada con la AFP con los que considera ratificada su voluntad de permanencia en el RAIS, e indica que no se puede equiparar la ineficacia a la nulidad absoluta.

Y en el hipotético caso de mantenerse la decisión, no se debe ordenar la devolución de sumas diferentes a las indicadas en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993, por cuanto ningún otra valor está destinado a financiar la prestación del afiliado, por lo que condenar a pagar valores adicionales, configura un enriquecimiento sin causa a favor de un tercero dentro del negocio jurídico celebrado entre la parte demandante y PORVENIR S.A., como lo es COLPENSIONES; pero además, determinar que se deben reintegrar los gastos de administración y las primas de seguros, es tanto como ordenarle a una compañía de seguros a que si no se presenta el siniestro amparado, devuelva el valor de la póliza, fundamentase para ello en concepto del 17 de enero de 2020 expedido por la Superintendencia Financiera, además de ser valores que no le pertenecen al afiliado pues no financian la pensión de vejez, por lo que frente a estos aplica el fenómeno extintivo de la prescripción.

Cita aparte del salvamento de voto del magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán a la sentencia de tutela Rad. 5912 del 13 de mayo del año en curso (sic) y solicita analizar las circunstancias particulares de este proceso que, a su juicio, exhiben con suficiencia que en el acto jurídico celebrado entre las partes no se probó ninguno de los presupuestos establecidos en la ley para declarar la nulidad absoluta, como tampoco, la ineficacia por el argumento jurisprudencial de la falta del consentimiento informado, como quiera la AFP cumplió con la carga probatoria de acreditar que suministró la información suficiente y objetiva al momento de la vinculación como lo refleja el formulario de afiliación, el cual reitera se trata de un documento público que se presume auténtico, además que no fue tachado ni desconocido en los términos previstos en la ley, sumado a lo expuesto por

la parte actora en su interrogatorio y a los diferentes actos ejecutados durante el tiempo de permanencia en el RAIS, pruebas que analizadas en conjunto y de manera crítica, sin duda exhiben el tan mentado consentimiento informado, más allá del momento mismo del traslado, peticionando revocar la decisión y en su lugar absolver a la AFP de todas las pretensiones formuladas en su contra.

El apoderado de la **demandante** solicita confirmar la sentencia pues el traslado de la demandante al RAIS fue realizado por error motivado por la negligencia en la tarea de afiliación al incumplirse el deber legal de suministrar una información veraz y oportuna, con la advertencia del riesgo y consecuencias negativas que le generaría la determinación, sin hacer una comparación frente al RPMPD administrado por el ISS, hoy Colpensiones, sin que se le explicaran las características de uno y otro régimen y tampoco se le hicieran proyecciones pensionales, entre otros aspectos, lo que implica que adoptó la decisión sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña, como se tiene establecido por la jurisprudencia especializada.

En orden a decidir, basten las siguientes,

### **Consideraciones**

Como hechos debidamente acreditados en los autos, y no discutidos en esta instancia se tienen: la fecha de nacimiento de la demandante **14 de febrero de 1961**; su afiliación al sistema pensional, RPMPD el 10 de mayo de 1988, con traslado al RAIS mediante formulario diligenciado ante la AFP Protección S.A. el 30 de junio de 1995, y posterior movilidad a las AFP Colpatria S.A. el 30 de noviembre de 1998 y a Porvenir S.A. el 22 de julio de 1999, fondo en el que permanece actualmente.

Así las cosas, el **problema jurídico** en esta instancia, se contrae a determinar, si procede la ineficacia del traslado de la demandante del

RPMPD al RAIS, o por el contrario la razón está de parte de la AFP Porvenir S.A.. En el evento de llegarse a la misma conclusión del a quo, se establecerá si es viable el retorno automático de la actora al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES, con las consecuentes restituciones económicas, y los conceptos que estas comprenden.

Pues bien, se explica por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde la sentencia 31989 de 2008 bajo la figura de la nulidad, y a partir del año 2014 sentencia SL12136-2014, que la sanción impuesta por el ordenamiento jurídico a la afiliación o traslado de régimen desinformado es la *ineficacia* o exclusión de todo efecto jurídico a tal acto, lo que encuentra fundamento en los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el Decreto 663 de 1993, artículo 97 numeral 1º, aplicable a las AFP desde su creación, pues solo así es viable la escogencia de las mejores opciones del mercado, deber este que ha tenido una evolución en su regulación, inicialmente como información propiamente – años 1993 a 2009 conforme a Decreto 663 de 1993 – Estatuto Financiero-, Decreto 720 de 1994, y Ley 795 de 2003, entre otras disposiciones; posteriormente agregándose la asesoría ó buen consejo Ley 1328 de 2009, Decreto 2241 de 2010; y por último, con la doble asesoría desde el año 2014 Ley 1748 de esta anualidad, Decreto 2071 de 2015 y Circular Externa 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera, sin que para su exigencia tenga incidencia el hecho de gozar o no el afiliado de régimen de transición o estar próximo o no a pensionarse o tener o no consolidado su derecho pensional, y sin que de la suscripción del formulario se infiera su cumplimiento y tampoco se convalide la misma por el transcurso del tiempo o por la movilidad entre administradoras del RAIS o por los actos de relacionamiento, invirtiéndose en estos casos la carga de la prueba, quedando en cabeza de las administradoras de pensiones la obligación de acreditarla, la que por demás se juzga al momento del acto inicial, sin que se convalide por actuación o reasesoría posterior, ello por la relevancia e

implicaciones que conlleva para el derecho pensional, de carácter fundamental a voces del artículo 48 Superior y 4º de la Ley 100 de 1993 (ver entre otras sentencias SL19447-2017, SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019, SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019, SL1838-2019, SL4343-2019, SL4937-2019, SL5144-2019, SL 5462-2019, SL5533-2019, SL149-2020, SL373-2020, SL1763-2020, SL081-2021 y SL145-2021), tesis ratificada vía tutela por la misma Corporación entre otras en sentencias (STL3182-2020, STL3187-2020, STL3191-2020, STL3193-2020, STL3196-2020, STL3197-2020, STL3199-2020, STL3200-2020, STL3201-2020, STL3202-2020, STL3226-2020, STL, 18 mar. 2020, rad. 56794, STL, 18 mar. 2020, rad. 57402, STL, 18 mar. 2020, rad. 57902, STL, 18 mar. 2020, rad. 58678, STL, 18 mar. 2020, rad. 58918, STL, 18 mar. 2020, rad. 59124, STL, 15 abr. 2020, rad. 57168, STL, 15 abr. 2020, rad. 59268, STL, 30 abr. 2020, rad. 59302).

Ninguna de las AFPs accionadas trajo a los autos prueba de la debida asesoría brindada a la demandante al momento de la vinculación al RAIS y para la fecha de movilidad entre administradoras, sin que baste la suscripción del formulario, que dicho sea de paso se ajusta a la regulación legal, sin que de la leyenda pre impresa y datos en el consignados se infiera *la asesoría completa y detallada sobre características y condiciones del RAIS y sus diferencias con el RPMPD*, y el debido acompañamiento durante el tiempo en que perduró la incorporación al RAIS, pues tal como se ha explicado insistentemente por la jurisprudencia especializada en pronunciamientos que se condensan en sentencia de tutela radicación 59.370 del 06 de mayo de 2020:

***¿El deber de información se acredita con la suscripción del formulario?***

*Desde la sentencia CSJ SL, 09 sep. 2008, rad. 31989, la Sala ha sostenido que la suscripción del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas similares,*

*no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento libre de vicios, pero no informado.*

*Así, en sentencia CSJ SL, 09 sep. 2008, rad. 31989, reiterada en CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL19447-2017 y SL4964-2018, la Corte adoctrinó:*

*No desdice la anterior conclusión, lo asentado en la solicitud de vinculación a la Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante, que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que "se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones", pues lo que se echa de menos es la falta de información veraz y suficiente, de que esa decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña.*

*A su vez, en sentencia CSJ SL12136-2014, reiterada en CSJ SL19447-2017 y CSJ SL4964-2018 señaló:*

*A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito.*

*En idéntica dirección, en fallo CSJ SL19447-2017 refirió:*

*Así que es la propia ley la que sanciona, con severidad, el incumplimiento íntegro de los deberes de información que les atañe e incluso, para la controversia aquí suscitada ello era determinante, de un lado porque la simple manifestación genérica de aceptar las condiciones, no era suficiente y, de otro, correspondía dar cuenta de que se actuó diligentemente, no solo por la propia imposición que trae consigo la referida norma, sino porque en los términos del artículo 1604 del Código Civil, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo y, en este específico caso ellas no se agotan solo con traer a colación los documentos suscritos, sino la evidencia de que la asesoría brindada era suficiente para la persona, y esto no se satisfacía únicamente con llenar los espacios vacíos de un documento, sino con la evidencia real sobre que la información plasmada correspondiera a la realidad y atendiera las pautas para que se adoptara una decisión completamente libre, en las voces del referido artículo 13 de la Ley 100 de 1993.*

*[...] no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario, aunque lo incorporado en él fuese contra evidente, es decir a pesar de la realidad patente de que la actora, para cuando lo suscribió, tenía un derecho consolidado y además la información dada era falaz, desde todo punto de vista, como ya se explicó.*

*[...] De manera que, conforme lo discurrido queda claro que existirá ineficacia de la afiliación cuando quiera que i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.*

*Finalmente, en sentencia CSJ SL1452-2019, se consolidó que:*

*[...] el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado.*

*Por tanto, hoy en el campo de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado (CSJ SL19447-2017), entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.*

Precisando:

*... el deber de información a cargo de las AFP, en los términos en que le era exigible para la época del traslado del actor, no necesariamente se cumple con proyecciones pensionales a futuro o con la manifestación de las ventajas del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, como parece entenderlo de manera equivocada el Tribunal encausado. Lo que exigían las normas vigentes a esa fecha era dar a conocer «la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado» (numeral 1.º, artículo 97 del Decreto 663 de 1993), premisa que implica una descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, pero también la obligación de dar a conocer toda la verdad objetiva de los regímenes, en un lenguaje claro, simple y comprensible. Subrayas fuera del texto original.*

Brillando por su ausencia prueba de la *asesoría completa y detallada*, que debió brindarse a la actora al momento de su traslado, y de la movilidad entre AFPs, pues como se explica por la línea mayoritaria de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la misma está a cargo de la administradora de pensiones, como entidad que presta servicios financieros y de seguridad social, relativos al cubrimiento de las contingencias de vejez, invalidez y muerte, y no del afiliado por cuanto: *i) tales servicios están íntimamente ligados con derechos de raigambre constitucional; ii) dicha entidad es profesional y/o experta, en una materia que esta «respaldada en complejos equipos actuariales capaces de conocer los detalles de su servicio, lo que las ubica en una posición de preeminencia frente a los usuarios»; iii) la reglamentación del sistema de seguridad social es compleja y en el caso*

*del RAIS, no solo está integrada por un asunto «hiperregulado, sometido a múltiples variables actuariales, financieras y macroeconómicas»; iv) existen limitaciones de los usuarios relacionadas con sus «condiciones económicas, sociales, educativas y culturales, que profundizan las dificultades en la toma de sus decisiones». De ahí que, como se dijo, en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, la AFP demandada debía «[...] proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad», dando a conocer «las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes».*

Tampoco se puede presumir que por la formación profesional de la afiliada, y por su actividad laboral, sea experta en temas pensionales, luego carecen de sustento y no tienen acogida los argumentos de la recurrente, resultando entonces acertada la declaratoria de **ineficacia del acto de traslado** dispuesta por la primera instancia, caracterizándose esta sanción porque desde su nacimiento el acto carece de efectos jurídicos, siendo sus efectos idénticos a los de la nulidad – vuelta al estado anterior, explicándose por el órgano de cierre de esta especialidad que en estos casos:

*... los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros. Así mismo, ha dicho que esta declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues estos recursos, desde el nacimiento del acto ineficaz, han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJSL1689-2019, CSJSL3464-2019, CSJSL4360-2019 entre otras).*

Y en sentencia SL2877-2020, radicación Nro. 78.666, fecha 29 de julio de 2020, frente al tema en concreto de las restituciones económicas, luego de transcribir el artículo 1746 del Código Civil, indicó:

*Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineffectividad es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene*



efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.

*Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular.*

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

*Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cubre a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Subrayado intencional.*

Y en relación con los porcentajes para el fondo de garantía de pensión mínima se advierte:

*En cuanto a los aportes para financiar la garantía de pensión mínima, es oportuno señalar que el artículo 14 de la Ley 797 de 2003 estableció aportes adicionales sobre el ingreso base de cotización con destino al fondo de solidaridad pensional para financiar la garantía de pensión mínima, para quienes devengaran entre 4 y 16 a 20 salarios mínimos legales mensuales, así como un fondo para el manejo de los mismos –artículo 14 ibídem-.*

*Pues bien, dicho artículo fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional, a través de sentencia C-797-2004, pero quedaron vigentes los aportes adicionales, de modo que dichos recursos los manejan las administradoras de pensiones privadas, en una subcuenta separada hasta que se cree de nuevo un fondo similar que se encargue de su administración; de hecho, de la subcuenta de cada AFP se financian aquellas prestaciones. Así lo regula el artículo 8.º del Decreto 510 de 2003, hoy compilado en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1833 de 2016. Además, el artículo 7.º del Decreto 3995 de 2008 contempla que cuando se efectúe un traslado de recursos del RAIS al régimen de prima media con prestación definida, debe incluirse la cotización correspondiente para la garantía de pensión mínima.*

***Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.*** Lo que desvirtúa la argumentación del a quo sobre el particular.

Y concluye la Corte:

***Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima».***

Acogiéndose por esta instancia un argumento de autoridad, no tienen prosperidad las razones tendientes a excluir de la orden de restitución las cuotas de administración y el porcentaje destinado a seguros previsionales, máxime cuando en sentencia de tutela radicado 59370 del 06 de mayo de 2020, el órgano de cierre de esta especialidad exhorta a los jueces a acatar el precedente vertical, en aras de la garantía de los principios de seguridad jurídica e igualdad, pudiendo apartarse del mismo siempre y cuando se cumpla con una carga argumentativa transparente y suficiente,

*mediante un proceso expreso de contra-argumentación que explique las razones del disenso, bien por: (i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto, (ii) cambios normativos, (iii) transformaciones sociales que obligan a dar una nueva mirada a determinada cuestión, o (iv) divergencias hermenéuticas fundadas en la prevalencia de mejores y más sólidos argumentos que permiten un desarrollo más amplio de los derechos, libertades y garantías constitucionales. Así, la posibilidad de separarse del precedente*

*emanado de las corporaciones judiciales de cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en primer término, un deber de reconocimiento del mismo y, adicionalmente, de explicitación de las razones de su desconsideración en el caso que se juzga (C-621-2015).*

Sin que se superen tales presupuestos, sino que por el contrario, la identidad fáctica de los asuntos ya analizados por la alta corporación es total frente al que se decide en esta ocasión, y sin que se haya operado un cambio normativo o transformaciones sociales que obliguen a nuevas consideraciones, por lo que no son de recibo los planteamientos de las AFP en torno a entender que las cuotas de administración cobradas son gastos que ya se causaron y ejecutaron, que se encuentran contemplados en la Ley para ambos regímenes y que el fondo adelantó una correcta gestión de administración, si se es consecuente con los efectos de la ineficacia y la parte que la generó. En efecto, recae en cabeza de las administradoras el juicio de reproche al incumplimiento de sus obligaciones de acompañamiento y asesoría a la demandante, generándose a partir de sus propias omisiones la obligación de que devuelvan todos los conceptos, sin que haya lugar a descuento ni equivalencia alguna.

Es intrascendente que la actora haya percibido unos rendimientos financieros a partir de la gestión administrativa de los fondos de pensiones, en tanto COLPENSIONES no tiene por qué ver diezmada la cotización de la asegurada, cuando debe responder por una permanencia en el régimen, sin solución de continuidad; además, que precisamente por tratarse de descuentos que también existen en el régimen de prima media con prestación definida, no deben ser realizados por las AFP sino por COLPENSIONES, que es donde siempre ha permanecido afiliada, precisándose en sentencia SL 2877 de 2020, que *"la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida..."*.-

Desde este punto de vista, no se estaría generando enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES o de la demandante, ya que se trata de la reivindicación de unas sumas que integran la cotización y que deben dirigirse a la administradora a la que ha pertenecido siempre y sin solución de continuidad.

Se cita por la una de las recurrentes apartes de la sentencia con radicación 31989 de 2008, en que se analizó el caso de un pensionado en el RAIS, decisión en la que frente a las restituciones se explica:

*Las consecuencias de la nulidad de la vinculación respecto a las prestaciones acaecidas no es plenamente retroactiva como lo determina la normatividad del derecho privado, la que no tienen cabida enteramente en el derecho social, de manera que a diferencia de propender por el retorno al estado original, al momento en que se formalizó el acto anulado, mediante la restitución completa de las prestaciones que uno y otro hubieren dado o recibido, ha de valer el carácter tutelar y preservar situaciones consolidadas ya en el ámbito del derecho laboral ora en el de la seguridad social; en la doctrina es indiscutido que la nulidad del contrato de trabajo, no priva al trabajador del derecho a su remuneración; o que en materia de seguridad social, en el laboral administrativo, según el mandato expreso del artículo 136 del C.C.A. el trabajador o el afiliado de buena fe, tiene el derecho a conservar, sin deber de restituir las prestaciones que le hubieren sido pagadas.*

***En el sub lite, la anulación de la vinculación ha de obrar sin perjuicio de dejar incólume la situación consolidada por el otorgamiento de las mesadas pensionales; el afiliado, que lo fue de buena fe, no está en el deber de restituir las mesadas pensionales a su administradora y ésta debe asumir lo erogado por ella como un deterioro de la cosa entregada en administración; el afiliado a la seguridad social tendrá derecho a reclamar por cobertura de vejez por el tiempo en el que las mesadas fueron pagadas, sólo la diferencia que se presentare entre las mesadas que ya le fueron pagadas, y las que resultaren del reconocimiento que hiciere la administradora de régimen de prima media al que retorna.***

***La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.***

***Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de***

***ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.***

*Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba el actor antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a partir de cuando le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada.*

Sin que para el caso concreto se hayan generado ni pagado mesadas que son las que se dejan a salvo, siendo unánime la jurisprudencia desde tal providencia en indicar que los gastos de administración deben restituirse y serán asumidos por la administradora con cargo a su propio patrimonio.

Incluso, siendo consecuentes con ese mismo efecto, habrá de **adicionarse y revocarse el numeral segundo** de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, a efectos de que Porvenir S.A., en el término indicado por el A quo, no solo devuelva los aportes, con sus rendimientos y las cuotas de administración, sino también el porcentaje de la garantía de la pensión mínima, el eventual bono pensional y las primas previsionales descontadas, sin equivalencia alguna; e igualmente, y **el numeral tercero** para ordenar a la AFP Protección S.A. la devolución del total del porcentaje descontado para gastos de administración, incluidos los dineros destinados a seguros previsionales, durante la vigencia de la vinculación de la actora a esa sociedad, conceptos que se deben restituir a Colpensiones debidamente indexados. Ver entre otras sentencias SL 1688, SL1689 ambas de 2019, en las que se explica:

## ***2. Otras consecuencias prácticas de la declaración de ineficacia***

*Está probado que la AFP accionada trasladó al ISS, hoy Colpensiones, los aportes que el demandante tenía en su cuenta individual con sus rendimientos (f.º 127), sin embargo, no existe constancia de que hubiese devuelto también los valores correspondientes a gastos de administración, de los cuales, según se expuso en*

*las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL9464-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019, debe asumir con cargo a sus propios recursos.*

*En tal sentido, se condenará a la AFP accionada a la devolución de estos dineros, debidamente indexados.*

Actualización que no desconoce los derechos de contradicción y defensa porque solo tiende a conservar al valor de los recursos. No hay lugar a la indexación de los valores a devolver por la AFP Porvenir S.A., por estar aún en su poder, debiendo generar como mínimo los rendimientos exigidos por la Superintendencia Financiera.

Valga aclarar que no se está en este caso autorizando un traslado de régimen desatendiendo la restricción temporal del artículo 2º de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, *después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez*, sino imponiendo la sanción de ineficacia al tránsito entre regímenes, por no haberse dado una libertad informada en los términos del literal b) de la misma norma en concordancia con el artículo 271 del mismo estatuto, decisión con la que en manera alguna se atenta contra la sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pues con el traslado integro de recursos se garantiza la equivalencia de condiciones en aportes en el evento de haberse mantenido la vinculación, máxime cuando si bien es cierto esta es una regla introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el 48 de la Constitución Política, debe tenerse en cuenta el Acto Legislativo 03 de 2011, artículo 1º, que modificó el artículo 334 superior relativo al régimen de Hacienda Pública, que en su **parágrafo** reza: ***al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su efectiva protección.***

Al imponerse al acto jurídico de traslado de régimen la sanción de ineficacia, no aplica para esta el termino prescriptivo que para la nulidad relativa prevé el artículo 1750 del Código Civil, pues según la jurisprudencia especializada, entre otras, sentencia CSJ SL1689-2019, dicha figura no opera *«de manera automática, en perjuicio de la posibilidad de acceder a derechos laborales o pensionales que gozan del carácter de imprescriptibles»*, razón por la cual *«el análisis de la pretensión relativa a la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional»*, al ser *«es una cuestión inherente al derecho a la seguridad social»*, que redundando en *«un aspecto ínsito a la posibilidad de adquirir una prestación pensional»* no es sujeta a esa figura y tampoco el termino trienal de las normas laborales, por tanto, puede reclamarse o hacerse exigible judicialmente en cualquier tiempo, siendo sus efectos como se explicó la vuelta de las cosas al estado anterior, sin que le asista razón a los recurrentes en lo atinente a la prescripción de sumas a devolver, las que son consecuencia directa de tal sanción, que solo se decreta en esta acción judicial.

Costas en esta instancia a cargo de las AFP Protección S.A. y Porvenir S.A. a quienes resulta adverso el recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de **\$908.526,00**, a cargo de cada una y a favor de la demandante.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **adiciona y revoca el numeral segundo** de la parte resolutive de la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido **María Piedad Duque Saldarriaga**, para ordenar la **AFP Porvenir S.A.** restituir a COLPENSIONES, en el término indicado por el A quo, no solo los aportes, con sus rendimientos y las cuotas de administración, sino también el porcentaje de la garantía de la pensión mínima, el eventual bono pensional y las primas previsionales descontadas, sin equivalencia alguna y el **numeral tercero**, para indicar que La AFP

Protección S.A. debe restituir las cuotas de administración por el lapso de permanencia de la demandante en esa sociedad, en el plazo dispuesto por la a quo, incluido el porcentaje destinado al pago de seguros previsionales, **debidamente indexadas. En lo demás se confirma la providencia revisada.**

Costas en esta instancia a cargo de las AFP Protección S.A. y Porvenir S.A. a quienes resulta adverso el recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de **\$908.526,00 a cargo de cada una de las sociedades y a favor de la demandante.**

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el 15 del Decreto 806 de 2020.

**Los magistrados** (firmas escaneadas)

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL**  
Magistrada

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

**Certifico:** Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 114** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, **01 de julio de 2021.**

\_\_\_\_\_  
Secretario